



Diego Rivera '31

Los 120 días. El conflicto estado-empresarios de agosto a noviembre de 1982

Saúl Escobar

Hacia fines de julio y principios de agosto de 1982 la crisis mexicana era muy comentada en los medios estadounidenses. El programa de la cadena de televisión ABC, *Mexico: Times of Crisis*, así como la declaraciones del embajador John Gavin, mostraban una gran preocupación por las repercusiones políticas y sociales de la crisis. ¿El “sur de la frontera” se convertiría en una inmensa centroamérica? ¿Los estadounidenses tendrían junto a su país una nación azotada por dictaduras militares, terrorismo, inestabilidad política? En vista de la inflación y la fuga de capitales, la comunidad financiera internacional decía abiertamente que México no estaba controlando su crisis. El país había dejado de ser un sujeto de crédito aceptable, lo cual significaba que México no recibiría nuevos préstamos y que, por lo tanto, no tendría para pagar las deudas anteriores, convirtiéndose así en un país moroso. Esto, a su vez, requería una negociación con el Fondo Monetario Internacional y su intervención directa.

La presión internacional hizo que la burocracia política mexicana reflexionara en serio sobre la viabilidad de persistir en una política de libertad de cambios que agravaba cada día más la fuga de capitales y, en consecuencia, su debilidad financiera en el exterior. Terminar con la libertad de cambios suponía alterar considerablemente una regla del juego político, puesto que esta libertad era esencial en sus relaciones con el gran capital privado, en particular con los ban-

queros mexicanos, así como con el capital extranjero invertido en nuestro país. El hecho de que el gobierno soportara a costa de sus finanzas la libertad de cambios le había valido un amplio reconocimiento de los banqueros y de la “iniciativa privada”, si bien las organizaciones de industriales y comerciantes criticaban seriamente la política económica en otros aspectos. Sin embargo, este reconocimiento público era la contraparte de una situación no declarada, e incluso negada, a mediados de 1982: la creciente fuga de capitales reflejaba que, desde hacía meses, los grandes empresarios mexicanos ya no pensaban en salvar la economía sino en salvarse ellos mismos.

Más allá de los deseos del gobierno —que esperaba controlar la situación con medidas que en lo fundamental durante los meses de abril a julio fueron concesiones y apoyos a los empresarios—, la economía salía cada vez más fuera de su control. De la misma manera, más allá de las declaraciones de los empresarios, de sus críticas, propuestas y apoyos, la inflación y la recesión —que ellos mismos hicieron más críticas con la persistente fuga de capitales— se acentuaban cada vez más. Así, la fuerza de las circunstancias se imponía sobre los deseos del gobierno y contradecía las declaraciones de los empresarios.

Negocios son negocios. No importaba que la creciente fuga de capitales de los grandes empresarios mexicanos dañara a sus propias empresas. Si este capital estaba más seguro en el extranjero,

había que sacarlo a pesar de que otra parte de su capital, el invertido en México, se resintiera. La deuda externa privada era enorme pero, como se supo después, menor a la que los propios mexicanos tenían invertida en activos financieros y bienes raíces en Estados Unidos. Más aún, es probable que la deuda externa contraída desde mediados de 1981 fuera contratada precisamente en gran parte para esas inversiones foráneas. A partir de febrero de 1982 y en la medida en que la crisis se agravaba, se sumaron a aquella cantidad los pesos producto de sus ganancias locales que, cambiados a dólares en México —dólares provenientes de la deuda pública y del petróleo de las refinerías del estado—, también se fue al extranjero. Pagar la deuda externa de sus empresas trayendo sus capitales invertidos afuera —o al menos dejar de trasladar sus ganancias al exterior— no tenía sentido económico para los grandes empresarios, si por esto se entiende acumular capital en un país en el que los grandes propietarios privados de los medios de producción han llegado a concentrar una parte tan importante de la riqueza nacional y, además, en un régimen de libertad cambiaria.

Desde la perspectiva económica la explicación puede ser sencilla. Pero la traducción de esa situación económica en fenómenos políticos y sociales creó una atmósfera que hacía peligrar la permanencia en el poder de la burocracia política mexicana. El deterioro de la economía, las presiones internacionales y las características propias que definen a la burocracia política mexicana, hacían que para ella la situación amenazara su supervivencia. La quiebra del país la pagan en primer lugar, desde luego, los trabajadores mexicanos. Los grandes empresarios también la pagan por las quiebras de algunas empresas, la baja de la producción y quizá de sus ganancias; pero la desvalorización de su capital productivo se compensa con la colocación de fondos en el extranjero. Para los pequeños y medianos empresarios esto no es así: seguramente pierden más de lo que ganan. Pero para la burocracia política, por más que ellos mismos también hayan trasladado sus fortunas personales al extranjero, lo que se juega es el poder político. Son ellos, a fin de cuentas, los responsables del país, y lo que le

sucedía a éste lo pagan ellos, políticamente hablando. Y del mismo modo en que los grandes empresarios respondieron a sus intereses de negociantes, así la burocracia política respondió a sus intereses como políticos. Si se tardaron en hacerlo, o lo hicieron de manera contradictoria o equivocadamente, ese es otro problema.

A principios de agosto de 1982, si de un lado la crisis se agudizaba, la presión internacional se hacía más fuerte y la fuga de capitales se acentuaba —agravando a su vez la crisis y la desconfianza internacional—, por otra parte también es cierto que los empresarios no habían roto con el estado ni habían organizado o estaban organizando una respuesta política. Habían aceptado y avalado el proceso electoral de julio; habían acatado el relevo presidencial e incluso iniciaban negociaciones con el futuro presidente. No había ningún signo de que intentaran violentar de alguna manera el proceso institucional de cambio de poderes, previsto para el 1o. de diciembre, y, aunque lo pensaran o lo desearan, no estaban en condiciones políticas y materiales de hacerlo. Así, siguieron haciendo declaraciones, unas más violentas, otras abiertamente conciliadoras con el gobierno. Seguramente alentaban la desconfianza contra el gobierno cuando se reunían a solas o enardecían sus críticas y exigencias cuando lo hacían con funcionarios públicos. Pero así ha sido en México desde hace muchos años. No intentaron otra cosa ni se salieron de lo establecido por el sistema; aunque deteriorada, la iniciativa política estaba todavía en manos del gobierno y en particular del presidente de la República.

Arrancando agosto, el gobierno autorizó incrementos en la gasolina, el diesel, el gas doméstico, las tarifas eléctricas, el pan y las tortillas. Aumentos que oscilaban entre un 30 y un 100%. Los empresarios calificaron como “necesarias” estas medidas porque reafirmaban su interés en que se redujeran los subsidios estatales “inflacionarios”. Pero el efecto inmediato consistió en que se alentó la escalada de precios que perjudicó, en primer lugar, a los trabajadores. Los dirigentes sindicales mostraron su desacuerdo. Y ante esto, los empresarios se apresuraron a declarar que no se debería caer en una “psicosis de demandas salariales”; aún más, insistieron en que

“todos los controles de precios deberían eliminarse”.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al fin y al cabo la organización que recoge la voz de los pequeños y medianos industriales, reconoció que “no estamos preparados para . . . el esquema de realismo económico porque al eliminarse los subsidios quedaremos en desventaja”. Y sugirió que el gobierno realizara un sacrificio fiscal en favor de los consumidores disminuyendo el IVA, para evitar una mayor caída de la demanda. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apoyó esta propuesta, y precisó que el IVA podría reducirse del 10 al 7 o al 5%.

Sin embargo, el gobierno no estaba tan preocupado por la recesión como por las presiones de la banca mundial. Los aumentos recientemente acordados tenían mucho que ver con las negociaciones establecidas con el FMI. Pero además, puesto que estas medidas agudizarían la inflación y ésta a su vez la fuga de capitales —lo que debilitaría aún más su posición ante el exterior—, el gobierno decidió tomar otras medidas.

El día 5 de agosto se anunciaron disposiciones que alteraban sustancialmente las reglas del juego de las últimas décadas. Ese día, la Secretaría de Hacienda anunció que entrarían en vigor dos tipos de cambio: uno preferencial —para la importación de bienes básicos— y otro de aplicación general. El boletín agregaba que era imposible “satisfacer la demanda de dólares” y que por eso se decidía aplicar un control de cambios sobre las divisas procedentes de las exportaciones de petróleo y de la deuda externa. Al mismo tiempo, el boletín señalaba que la otra paridad sería fijada libremente por la oferta y la demanda, con lo cual habría una nueva devaluación.

Estas medidas provocaron “asombro y desconcierto” entre los dirigentes del sector privado. José María Basagoiti, visiblemente alterado según un periódico capitalino, dijo que había sido una “decisión sorpresiva por parte del gobierno y que no podía hilar ideas”. “Este cambio radical al sistema cambiario mexicano es muy difícil. . . muy difícil”, comentó Manuel Clouthier. En cambio, Carlos Abedrop expresó su absoluta confianza en esa medida, mientras que Emilio Goico-

chea e Ignacio Barragán se abstuvieron de hacer comentarios.¹

Al otro día, en un comunicado de prensa, el CCE señaló que la responsabilidad del agravamiento de la crisis y en particular de la nueva devaluación era del gobierno. La “doble paridad” fue reprobada “por no ser adecuada para México”, por lo que manifestaban su “total desacuerdo” y preveían que esta medida provocaría una “mayor corrupción en el sector público”. Además, señalaba que en el sector privado se habían agudizado “los problemas de liquidez y las probables quiebras de empresas. . . La situación es más dramática de lo que nosotros creíamos”. La Canacintra también reprobó las medidas y señaló que propiciarían el “agravamiento de la situación financiera de las empresas, lo cual afectará severamente a los más débiles”.²

Dos días después, cambiando su parecer expresado en las primeras declaraciones, Abedrop señaló que el mercado dual “podía afectar severamente a un gran número de empresas”.

Por lo pronto, el dólar se cotizó entre 77 y 82 pesos y luego entre 68 y 76 pesos, lo que representaba una devaluación de 50%, aproximadamente, en relación a la última cotización previa al 5 de agosto, y del 300% en relación a la paridad vigente en enero de ese mismo año. El dólar “controlado” se fijó en 49.23 pesos.

El repudio unánime de las organizaciones empresariales al control parcial de cambios y a la nueva devaluación fue encarado por el presidente de la República al final de esa primera semana de agosto, el día 7, en una conferencia de prensa a la que no sólo asistió acompañado por el gabinete económico, sino también por el secretario de la Defensa y el de la Marina, así como el líder del PRI. El presidente denunció una vez más la fuga de divisas y señaló que como el sector público aportaba la mayor parte de ellas, el gobierno “podía y debía establecer a qué se van a destinar”. Por eso, y ante la posibilidad de que se agotaran las reservas y México se declarara en suspensión de pagos, y también ante la inconveniencia de que el dólar se fijara por la oferta y la demanda —por los efectos negativos que esto causaría—, se había decidido establecer un control parcial de cambios. Reconoció que “no todos

estaban de acuerdo” pero que trataría de “convencerlos” con sus palabras. Sin embargo, al final advirtió en forma enérgica que “se acabaron con esos tiempos de especulación con las divisas del petróleo y el crédito público”.³

El discurso presidencial, transmitido primero por televisión y publicado al día siguiente en todos los periódicos, no acalló las críticas. Animó, se diría, las opiniones en contra y atizó los sarcasmos y la desconfianza generalizada de la población ante cualquier medida o disposición tomada por el presidente, y que se desataron con el discurso que improvisó José López Portillo en la clausura de la V Reunión de la República, el 5 de febrero de 1982, días antes de la primera devaluación del año. En agosto, el único comentario favorable provino de un representante del Bank of America, quien dijo que las medidas eran “inevitables” para evitar la fuga de divisas. Las organizaciones empresariales siguieron repudiando fuertemente las medidas, pero ante los hechos consumados se manifestaron porque se negociara de inmediato la deuda externa y por exigir divisas preferenciales, punto este más que confuso ya que el Banco de México no había anunciado los criterios para determinar cuáles productos de importación recibirían dólares preferenciales.⁴

Cinco días después de la conferencia de prensa, el 12 de agosto, se anunciaron nuevas medidas complementarias al control parcial de cambios. En un boletín de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, se anunciaba que a partir del día 13 los “depósitos en dólares que sean retirados de los bancos serán pagados en moneda nacional al tipo de cambio de 69.50 pesos; también se cancelaba y prohibía cualquier tipo de transferencia de capital en dólares al extranjero”; y se anunció también el cierre temporal del mercado de cambios “para terminar con la especulación exagerada”. Según un reportaje, en ese momento los depósitos en dólares en la banca nacional eran de 11,803 millones de dólares, o sea, 820, 308 millones de pesos al nuevo tipo de cambio.⁵

El mercado negro de dólares hizo su aparición elevando la cotización: 150 pesos por dólar. La inquietud era mayor en la medida en que el Banco

de México no señalaba cuánto tiempo iba a estar cerrado el mercado cambiario. Las organizaciones empresariales exigían que esta cuestión se definiera lo más rápido posible. Evidenciando que los acontecimientos estaban rebasando a los empresarios, el presidente del CCE declaró que la iniciativa privada vivía ya con el temor de que se anunciara una nueva decisión gubernamental, pues “cuando apenas estamos asimilando una cosa ya tenemos otra encima”.⁶

Pero no era que se hubieran modificado tantas cosas, sino las dimensiones de los cambios; porque en efecto, en el curso de los primeros días de agosto las reglas del juego habían cambiado. Las medidas anunciadas afectaban sobre todo el libre flujo de capitales, que había permitido a los grandes capitalistas mexicanos y transnacionales realizar operaciones financieras muy provechosas para ellos y muy perjudiciales para la estabilidad financiera del país y de la actividad productiva. Las nuevas medidas otorgaban al gobierno una capacidad de regulación sobre la cantidad y el uso de las divisas, lo que ponía a la iniciativa privada en condiciones de negociación inéditas. Pero el repudio empresarial no se explica solamente porque con esas disposiciones se limitara la especulación —ya de por sí muy avanzada después de año y medio de intensa actividad—, sino también por su aspecto político: el control estatal de las divisas otorgaba un nuevo instrumento a la burocracia política para ejercer control en el terreno financiero.

Aunque la protesta empresarial fue unánime, su sorpresa, su incapacidad para reaccionar y su falta de propuestas alternativas, mostraron asimismo que los empresarios no estaban en condiciones de capitalizar la crisis a su favor en el terreno político. A pesar de su poder económico, su control sobre importantes medios de comunicación, su organización mediante cámaras patronales y en una organización cúpula como el CCE, la iniciativa privada carecía de capacidad política, lo que en momentos de crisis se reflejó claramente en un sainete declarativo e impugnador que de ahí no pasó. Su actitud frente a la crisis durante el último año, de “sálvese quien pueda”, sacando del país tantos capitales como fuera posible, reflejó también esa ausencia de capacidad

política para enfrentar la crisis. Después de casi seis meses de dudas, contradicciones, planes de austeridad y un gran temor manifiesto para actuar contra la fuga de capitales, el gobierno al fin se había decidido a tomar algunas medidas que políticamente significaban una ruptura con la tradición, una ruptura desde luego molesta para los banqueros y los grandes capitalistas. Fuera del país, las medidas no causaron mayor inquietud en los medios financieros. Si los capitalistas nativos se sorprendieron, esto se debió tal vez a su excesiva confianza en que el gobierno respetaría las reglas del juego eternamente. La sorpresa mostró asimismo divisiones internas dentro de las organizaciones empresariales, lo que indica que la comunidad empresarial, lejos de anticiparse políticamente a una crisis que no alcanzaba a comprender del todo, precipitada en el vértigo especulativo de la fuga de capitales —colofón de una etapa de crecimiento sostenido artificialmente—, no tenía, al menos hasta 1982, una sólida identidad propia.

En otro orden de cosas, la prensa hablaba de que se realizaban negociaciones con el FMI para renegociar la deuda externa. Los empresarios mexicanos se pronunciaron inmediatamente porque se llegara pronto a un acuerdo, agregando además que de este modo el gobierno tendría que comprometerse a volver al mercado libre de cambios por lo que “resultaría doblemente provechoso recurrir al FMI”.

A mediados de la tercera semana de agosto, el día 18, el gobierno anunció por fin la reapertura del mercado de cambios para el día siguiente con tres tipos de cotización: preferencial, libre y la de los depósitos bancarios en dólares (o mexdólares). También anunció la obtención de apoyos financieros por 3,500 millones de dólares y oficialmente se dio a conocer el inicio de las pláticas con el FMI. Los 3,500 millones de dólares estaban compuestos de la siguiente manera: un millón por pago anticipado de petróleo, proveniente de Estados Unidos; millón y medio provenientes de una línea de crédito de bancos centrales de Alemania Federal, Italia, Francia, Inglaterra, Canadá, Suiza y Japón; y un millón más proveniente de Estados Unidos para financiar importaciones de granos. Jesús Silva Herzog

señaló también, ante las cámaras de televisión y en el boletín de prensa, que las medidas tomadas durante agosto se habían dictado ante el riesgo de “girar cheques sin fondos” para cumplir los compromisos externos.⁸

Al otro día, la Asociación de Banqueros de México (ABM) manifestó su satisfacción por el anuncio de las negociaciones con el FMI, el apoyo de 3,500 millones de dólares y la reapertura del mercado de cambios. Aclaró también que los fondos que no eran transferibles eran los depositados en dólares en la banca nacional hasta el 12 de agosto pero que había “absoluta libertad para todas las demás divisas extranjeras que poseen los particulares y que conservan en el país o fuera de él”.⁹ El viernes de esa semana, el día 20, la ABM señaló que la reapertura del mercado había sido tranquila y que el dólar se cotizaba en el mercado libre entre 130 y 110 pesos.

El 21 de agosto, la prensa nacional anunció que el secretario de Hacienda se había reunido en la ciudad de Nueva York con representantes de 115 bancos internacionales, llegando a los siguientes acuerdos:

a) un periodo de gracia de 90 días a partir de esta fecha en que no se pagará el capital de la deuda; y

b) una operación sindicada entre los principales bancos occidentales para conceder nuevos préstamos a México que resuelvan los problemas temporales de liquidez, sin especificar su monto.

Extraoficialmente se decía que México buscaba conseguir un préstamo tipo *stand by* por 4,500 millones de dólares al FMI; y entre 500 y un millón de dólares al Bank of America y al Chase Manhattan Bank. Estos préstamos, más los 3,500 millones de dólares anunciados el día 18, darían un total de 9,000 millones de dólares, cantidad que el gobierno consideraba suficiente para pagar el servicio de la deuda (unos 3,800 millones) y las importaciones más indispensables.

La nueva devaluación que sufrió el peso al reabrirse el mercado de cambios, el anuncio de la deuda externa y la advertencia de que faltarían dólares durante un periodo prolongado, volvieron a hacer decir a los empresarios que la crisis había alcanzado “dimensiones inesperadas”.¹⁰ Al día

siguiente, el 26 de agosto, se reunieron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la República Mexicana con López Portillo. Al final de la reunión, los dos empresarios declararon que las paraestatales habían llevado al país a la ruina y que el gobierno debería vender sus negocios pues el empleo improductivo era un "fenómeno gigantesco en la burocracia". También señalaron que sostener el empleo era más importante que otorgar incrementos salariales. Para terminar, denunciaron que los "sacadólares" eran principalmente los políticos. Por su parte, algunos representantes del capital extranjero comentaron ese mismo día que estaban "revisando sus operaciones en México". En los días anteriores, la prensa internacional había señalado que el mercado de cambios "dual" era un fracaso; mostraba su sorpresa por el congelamiento de los "mexdólares" y se preguntaba si México cumpliría sus compromisos en los noventa días previstos. Manifestaba su temor de que México se convirtiera en un "nuevo Irán o Argentina".¹¹ En lo que se refiere a la cuestión salarial, el mismo 26 de agosto la Secretaría del Trabajo informó que "durante los últimos días se habían celebrado diversas reuniones de análisis y consulta con representantes del sector obrero y empresarial", y que, ante la difícil situación financiera del país, "en un espíritu de comprensión recíproca y moderación. . . se procuraría resolver el planteamiento salarial del sector obrero". En los días siguientes, la parte patronal señaló que su posición consistía en negociar "empresa por empresa" y no un aumento generalizado.

En vísperas del último informe de gobierno, las organizaciones empresariales reclamaban información pues, según ellos, a falta de ésta se propagaban rumores "irracionales" que "pueden convertir la crisis económica en crisis social". Por su parte, López Portillo anunció en un discurso, un día antes de su informe, que pedía a los trabajadores "estar alertas porque tendremos que reconstruir este país".¹²

Los últimos quince días de agosto mostraban que si bien el gobierno retomaba la iniciativa, las medidas no eran suficientes para controlar los flujos financieros hacia el exterior. Las declara-

ciones de Abedrop parecían una invitación a que la fuga de capitales continuase protegida y encauzada por la banca privada. La nueva caída del peso al reabrirse el mercado indicaba que la devaluación se aceleraba de manera incontrolada. Ya lo de menos era cuánto costara un dólar, lo importante era cuántos podían conseguirse a cualquier precio. En el ámbito externo, la moratoria había sacudido al sistema financiero internacional. México era el primer gran deudor que no pagaba. Sin embargo, el lapso de noventa días había abierto un espacio de negociación en el que se buscaría un arreglo para impedir una moratoria total. Quedaba pendiente, además, todo lo relacionado con la deuda externa privada. Los noventa días se cumplirían quince días antes del cambio de gobierno, pero se suponía que el arreglo comprometería al nuevo equipo gobernante.

Aunque ya había pocos dólares que llevarse, la existencia de un mercado libre en manos de los bancos privados hacía incontrolable el tipo de cambio en este mercado, lo que afectaba la cotización del dólar controlado y los ajustes del programa. Además, y esto quizá fue lo sustancial, las medidas tomadas por el gobierno durante el mes de agosto parecían crear más problemas que soluciones. El gobierno seguía desgastándose. Por otra parte, la cercanía del cambio de poderes y la presencia de ministros del sucesor en el gabinete del presidente en funciones, parecían impedir que López Portillo tomara nuevas decisiones.

La moratoria externa, la inestabilidad cambiaria, la inflación, la caída de la producción y del empleo continuaban. Todo esto creaba una atmósfera de inestabilidad, en donde todas las opiniones podían ser ciertas y al mismo tiempo todos los diagnósticos eran desmentidos por la realidad. Las declaraciones de los empresarios culpaban al presidente como el responsable mayor de la situación. Los dirigentes sindicales oficialistas mantenían su apoyo al gobierno —lo mismo que la maquinaria oficial—, pero con su adhesión incondicional tampoco proponían ninguna solución. En la izquierda y el movimiento popular independiente, se manifestaba el descontento sobre todo en lo que se refería a los salarios y la carestía. Este descontento, por su

relativa debilidad, no era sin embargo una amenaza contra el gobierno.

En medio de la inestabilidad se percibía un vacío político. El gobierno parecía estar atado de manos, y cuando actuaba lo hacía de manera contradictoria o empeoraba las cosas. Las fuerzas ajenas al gobierno criticaban su actuación pero no estaban en condiciones de cambiar el curso de las cosas. La misma burocracia política parecía dividida; una parte apoyaba al presidente y otra, empezando por el sucesor, De la Madrid, callaba. En estas condiciones, unos parecían esperar algo sin saber qué, y otros simplemente deseaban que los tres meses que restaban de gobierno se consumieran rápidamente, como si de este modo pudiera evitarse que algo o alguien agravara todavía más las cosas.

Este vacío terminó el primero de septiembre cuando López Portillo decretó, en su último informe de gobierno, la nacionalización de la banca privada y el control integral de cambios. Todos se sorprendieron; lo mismo quienes esperaban algo como los que simplemente querían que pasara el tiempo. López Portillo tomó esta decisión, como en otras ocasiones durante ese mismo año, "en la soledad de su despacho"; junto a él estuvieron uno o dos miembros de su gabinete y un político que cinco años antes había sido desplazado, Carlos Tello. Pero una vez anunciada, la decisión logró llenar ese vacío político. Y lo más importante, concertó el apoyo de sectores claves del estado: el PRI, los sindicatos oficiales, el ejército y amplios sectores de la opinión pública. Las discrepancias internas del gobierno y en particular dentro del gabinete fueron mínimas. El sucesor decidió callar. Y los empresarios, desde luego, protestaron pero ante hechos consumados.

La nacionalización de la banca privada tuvo causas y efectos mucho más profundos que éstos que acabamos de comentar, pero es indudable que la decisión se precipitó en los últimos 15 ó 30 días previos, forzada por las circunstancias y aprovechando una situación política extraordinaria. El aislamiento del presidente se convirtió en fuerza política y consenso. La pasividad de la burocracia política y las discrepancias de los empresarios en condiciones de debilidad política, se lo permitieron.

Durante su sexto y último informe de gobierno, al explicar las causas de la crisis, el presidente mencionó, en primer lugar, los factores externos: altas tasas de interés, baja en el precio de las materias primas, disminución de las exportaciones, baja del turismo en nuestro país. Pero luego señaló que estos problemas hubieran podido resolverse "con esfuerzo pero sin deterioro". Y agregó inmediatamente: "Con lo que no pudimos fue con la pérdida de confianza en nuestro peso. . . Así de subjetiva es la causa fundamental de la crisis. . . Contra esto ya no pudo el vigor de nuestra economía". Más adelante, el presidente denunció que había unos 14 mil millones de dólares depositados en la banca extranjera y otros 8 mil millones invertidos en bienes inmuebles en Estados Unidos, además de los 12 mil millones de "mexdólares". Dijo también que se había dado el caso paradójico de la existencia de deudas en dólares contratadas por las empresas y empresarios con cuentas de ahorro en dólares. A este fenómeno lo llamó "empresarios ricos, empresas pobres".

Al hacer un resumen del curso de la crisis, López Portillo apuntó que después del 17 de febrero "nos adentramos en un proceso definitorio (tomando) medidas que no implicaron cambios radicales en los sistemas y mecanismos establecidos, respetando su tradición y el consenso relativo que significaban hasta agotar todas sus posibilidades". Enfatizó que en los meses posteriores a febrero se tomaron "medidas defensivas". Aclaró luego que "la crisis de hoy es distinta a la de 1976". "Aquella fue el gran final del agotamiento de una estrategia de crecimiento. La actual se presenta a poco del inicio de una nueva estrategia de crecimiento que ha tenido éxito innegable. La economía mexicana es hoy. . . más fuerte que la de hace 6 años".

López Portillo también señaló que en abril se hizo un ajuste todavía mayor "que se inscribió en la más estricta ortodoxia financiera". Aclaró que se había pensado contratar una deuda externa por 11 mil millones de dólares, y que hasta julio se habían contratado ya 6 mil millones. En esos momentos, según José López Portillo, el país contaba con recursos para resolver sus problemas. El paquete de medidas de austeridad iba

funcionando, pero la especulación financiera irrestricta rebasó los recursos existentes. "Contra la fuga de capitales no hay fondos suficientes que alcancen". Pasó después a justificar las medidas tomadas en agosto y, poco antes de anunciar la nacionalización y el control integral de cambios, afirmó: "Hemos identificado los grandes males. Primero los externos: un desorden económico internacional. . . Después los internos. Aquí fallaron tres cosas. . . la conciliación de la libertad de cambios con la solidaridad nacional, la concepción de la economía mexicanizada como derecho de los mexicanos sin obligaciones correlativas. . . El manejo de una banca concesionada sin solidaridad nacional y altamente especulativa. . . (Todo ello) significó que en unos cuantos años, sustanciales recursos de nuestra economía salieran del país por conducto de los propios mexicanos y sus bancos. . . un grupo de mexicanos aconsejados y apoyados por los bancos privados ha sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia". Enfatizó luego: "La cuestión de fondo, la alternativa vital se establece entre una economía progresivamente dominada por el ausentismo, por la especulación y el rentismo y otra vigorosamente orientada a la producción y el empleo. . . No podemos seguir arriesgando que los recursos sean canalizados por los mismos conductos que han contribuido de modo tan dramático a la gravísima situación que vivimos. . . Tenemos que organizarnos para salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle recursos financieros para salir adelante." Inmediatamente después el presidente anunció los decretos.

El diagnóstico de la crisis hecho por López Portillo fue, en parte, optimista, demagógico y autojustificativo. Las causas profundas de la crisis ni siquiera se mencionaron. La fuga de capitales no era sino la manifestación más visible de aquéllas. En el fondo, la crisis era resultado de un largo proceso iniciado a fines de la década de los sesenta, cuando la acumulación de capital empezó a toparse con problemas tales como saturación del mercado interno, tendencia a la disminución de la rentabilidad y, consecuentemente, disminución de la inversión. Para sostener el ciclo de expansión el estado intentó, durante

el sexenio de Echeverría, aumentar notablemente el gasto estatal y luego, con López Portillo, inyectar una gran cantidad de divisas provenientes de la exportación del petróleo. Si bien la inversión volvió a aumentar, cuando el financiamiento cayó por la disminución de los precios internacionales del energético, la expansión sostenida artificialmente se desinfló rápidamente. En realidad, las causas profundas de la crisis radicaban en el agotamiento de un ciclo económico.

Pero además, el discurso de López Portillo quería convencernos (y convencerse) de que la crisis era pasajera y leve, comparada con la de 1976. Se trataba, naturalmente, de justificar su propia administración en los momentos en que hasta el secretario de Hacienda reconocía que la presente era la más grave de las últimas décadas. De la misma manera, el presidente no aceptó prácticamente responsabilidad alguna, como si la crisis hubiera surgido de pronto, o como él mismo dio a entender: como una tormenta después de un cielo despejado. Así, López Portillo no reconocía la responsabilidad de una administración que se entregó a la tarea de fortalecer la banca privada y a los grandes monopolios privados nacionales y extranjeros, en su afán de modernizar y hacer crecer la economía en el tiempo más breve posible. Tampoco aceptó, desde luego, que esta política había llevado también a un deterioro de los salarios y del nivel de vida de los trabajadores.

Todo esto es cierto. Pero por otro lado, el discurso presidencial trataba de explicar las causas de una ruptura histórica en el seno del bloque del poder, concentrada en la nacionalización de la banca privada. Desde hacía dos décadas por lo menos, pero sobre todo durante su propio gobierno, el desarrollo capitalista mexicano había dado lugar a un doble proceso de convergencia y fusión simultáneos. Uno de ellos tuvo lugar al fusionarse cada vez más estrechamente el capital industrial con el bancario, con lo que se originó un sector dominante de la burguesía: monopolista y financiera. Por otro lado, esta capa tuvo una influencia cada vez mayor sobre el aparato gubernamental y conoció una creciente fusión con el capital estatal en el

nivel de las inversiones conjuntas en empresas, en el manejo del aparato financiero y en el uso y destino del gasto público.

El auge de 1979-81 no sólo fortaleció a la gran burguesía y le permitió conocer un proceso de expansión acelerada. También le permitió vincularse cada vez más con el capital financiero internacional. La deuda externa privada y la inversión privada de mexicanos en el exterior en empresas productivas, bienes inmuebles, activos financieros, etc., son expresión clara de la internacionalización de nuestra burguesía. Este proceso tuvo su concreción más clara en la banca privada, la cual se asoció a los grandes consorcios bancarios internacionales, abrió oficinas en el exterior y, sobre todo, se convirtió en un canal extraordinario por el cual fluían créditos hacia México y salía el ahorro interno —en dólares— al extranjero.

Al nacionalizar la banca privada el régimen intentaba romper este proceso. Pero hay que decir que el mismo gobierno, durante el auge, protegió y estimuló esta tendencia. En esos momentos, el gran capital y en particular los grandes banqueros fueron sus mejores aliados en su afán modernizador. Cuando vino la crisis, lo que en épocas de vacas gordas había sido positivo se transformó en causas de tensión y conflicto. Los créditos se volvieron pesadas cargas que ahogaban a las empresas; la salida de capitales fue ahora pura especulación y la banca privada el mejor agente y socio de este afán especulativo. El crecimiento de la planta productiva y la modernización estaban siendo dañados gravemente por los mismos agentes que los habían sostenido y en quienes el gobierno había confiado. Así, las medidas del primero de septiembre significaban una ruptura con aquéllos en quienes el gobierno había volcado su apoyo para modernizar al país, con aquella capa de la burguesía más fuerte, y, finalmente, con aquéllos que habían sido los usufructuarios de una etapa histórica de México que arranca desde 1955. No fueron los únicos, pero sí los más importantes. Por eso, la nacionalización de la banca privada, más allá de las razones políticas y económicas, producto de la coyuntura, tuvo un alcance histórico mayor. Significó una ruptura dentro del bloque en el poder

existente desde hacía cerca de tres décadas. Así, la nacionalización y la persistencia de la crisis planteaban también una reestructuración del bloque en el poder y una reestructuración del capitalismo mexicano. Reestructuración en el sentido de cambios sustanciales en los mecanismos de acumulación de capital. Por lo tanto, a partir de ese momento, se abría un periodo de transición para el país que no ha dejado de repercutir en el conjunto de la sociedad mexicana. El que este proceso de transición concluya más tarde o más temprano, el que al final de esta transición tengamos un país más o menos democrático, o más o menos injusto, no depende sin embargo de la nacionalización de los bancos privados. Esta medida sólo marcó el inicio de la transición.

Lo que sucedió después del primero de septiembre dejó claro que López Portillo había jugado su última carta. No intentó poner en práctica nuevas disposiciones, si exceptuamos, claro, las que se dictaron desde el Banco de México (baja en las tasas de interés, dos paridades fijas, etc.). La inflación siguió en aumento y la fuga de capitales, aun cuando disminuyó, continuó por otros medios en las casas de bolsa de la frontera norte. La renegociación de la deuda externa se arregló en lo fundamental mediante un acuerdo con el FMI. Pero las medidas de ajuste más severas se tomarían ya en el gobierno de Miguel de la Madrid.

Si en el aspecto económico los últimos noventa días del régimen de López Portillo no lograron estabilizar la economía, en el aspecto político las repercusiones de la nacionalización, en lo fundamental, pudieron controlarse.

“Nadie soñaba con esta medida”, decía un editorial en la revista *Expansión*.¹³ En efecto, como ya se dijo, el decreto nacionalizador había sido sorpresivo. Todo parece indicar que fue tomado por el presidente y un grupo muy reducido de colaboradores que no incluyó al gabinete en pleno, y ni siquiera a los responsables de las finanzas nacionales, el secretario de Hacienda y el director del Banco de México, quien renunció a su cargo. Esto indicaría que la medida fue un golpe político sin consenso previo dentro del aparato estatal, y que por lo tanto, existía el riesgo de fricciones, rupturas y enfrentamientos

en el interior del gobierno. También había riesgo de que la respuesta empresarial desbordara la capacidad de respuesta del estado. Pero la medida resultó acertada; la burocracia política respondió en apoyo al presidente y fue relativamente fácil contener a los empresarios.

El rechazo por parte de los voceros empresariales a las medidas anunciadas el primero de septiembre fue, naturalmente, inmediato y enérgico, en particular por parte de la ABM, la Concanaco y el CCE. Dijeron que la crisis se agravaría, que se había cometido una injusticia y que el país se encaminaba hacia el socialismo.¹⁴ El 3 de septiembre, el CCE publicó una declaración más amplia en la que afirmaba que las consecuencias de la estatización eran, de suyo, “sumamente graves”. En sus palabras, se había traspasado el umbral crítico: “El futuro se ve con total incertidumbre y desconfianza. La estatización de la banca es un golpe definitivo a la actividad empresarial y una señal de la entrada del país al socialismo”. El mismo día, los empresarios de Nuevo León advirtieron que los “efectos en cascada son la nacionalización de los medios de comunicación, grandes almacenes, la industria farmacéutica y alimentaria”. Pero a pesar de estas declaraciones, no lograba articularse una respuesta unificada que fuera más allá de las declaraciones. La ABM, por su lado, anunció que el lunes 6 entregaría los bancos sin resistencia, pero que recurriría a la defensa legal de sus intereses. Poco después, el CCE señaló que había presiones para realizar un paro nacional de actividades para el 8 de septiembre —cuestión que fue inmediatamente confirmada por la Concanaco de Monterrey—; sin embargo, un día antes, los máximos dirigentes del sector privado anunciaron la suspensión del paro, pues según ellos éste podría servir de “pretexto para el desmoronamiento del orden jurídico”. Convocaron, en su lugar, a lo que llamaron la Primera Asamblea Nacional de Empresarios para el 24 de septiembre. Mientras tanto, Ignacio Barragán, de la Canacintra, se sumó a la protesta e invitó a la población a “manifestar su disgusto por la pérdida de equilibrio de la economía mixta y a colocar un listón negro en casas y negocios”.

Mientras los empresarios sufrían este primer

repliegue, el aparato político priísta tomaba posiciones. El día 3 habían realizado un mítin en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México; y durante los días siguientes, los dirigentes del PRI, Manuel Bartlett y Pedro Ojeda Paullada, aseguraron que no se había atentado contra las libertades económicas. El presidente del PRI fue más allá y propuso, el día 8, que se modificara la Constitución para “que la banca jamás vuelva a manos de particulares”. Los dirigentes del Congreso del Trabajo, por su parte, exigieron además que las empresas nacionalizadas tampoco fueran devueltas. Finalmente, el ejército y la armada apoyaron también, de manera contundente, sin dejar lugar a dudas, los decretos del día primero.

Las reacciones de los organismos financieros internacionales y del gobierno de Estados Unidos fueron cautelosas y contradictorias. El mismo día del informe, el secretario norteamericano del Tesoro se limitó a señalar que su gobierno “no había recibido información previa”. Funcionarios del FMI no identificados manifestaron su desacuerdo especialmente con el control de cambios, ya que este tipo de medidas “no son recomendadas ni aceptadas en la línea de política económica que el FMI sostiene”. También aseguraron que oficialmente no formularían ninguna declaración por tratarse de actos de “soberanía nacional”. El 2 de septiembre, el *Washington Post* consideró que la nacionalización de la banca y el control de cambios eran medidas “necesarias”. Otros medios financieros estadounidenses también reaccionaron favorablemente y afirmaron que “se restauraría la confianza internacional en el sistema bancario mexicano”. En realidad, la banca mundial estaba más preocupada porque México pagara, que por las medidas que el gobierno decidiera imponer para que esto fuera así.

La reunión anual del FMI, en Toronto, se aprovechó para tratar de lograr una negociación sobre la deuda externa mexicana, que en ese momento ascendía a 80 mil millones de dólares aproximadamente. El 6 de septiembre se anunció que el FMI había otorgado su aval al gobierno mexicano y que se obtendría una moratoria por 18 meses sobre la amortización del capital. Sin embargo, al día siguiente la Secretaría de Hacien-

da aclaró que “no se hicieron arreglos de ninguna naturaleza ni fueron sugeridos por ninguna parte” para extender el plazo de gracia que vencía el 23 de noviembre. También los diarios informaron que estas noticias contradictorias se debían a que el acuerdo de ampliar la moratoria fue bloqueado por algunos bancos privados. El 8 de septiembre, “fuentes mexicanas” informaban a la prensa reunida en Toronto que las negociaciones podían quedar paralizadas “en caso de que el FMI mantenga las restricciones presupuestarias, suspensión de subvenciones y liberación del mercado de cambios como condiciones para avalar al gobierno mexicano”. Esto último lo confirmaron representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, quienes recalcaron que “no habría concesiones”. Finalmente, el mismo día 8, la prensa mexicana reprodujo un artículo del *Wall Street Journal* en que se criticaba las medidas del día primero y la actitud tolerante de los bancos centrales en Estados Unidos y Europa por ayudar a México. La reunión de Toronto terminó sin el anuncio de un acuerdo entre el FMI y el gobierno mexicano.

Pocos días después, el 15 de septiembre, un cable de prensa proveniente de Washington señalaba que la “estatización de la banca había recibido opiniones encontradas en medios financieros”, se temía que esta medida lejos de detener la corrupción, la acentuara, “aumentando la desconfianza”. El semanario *International Business Week* decía que López Portillo había nacionalizado la banca “para prevenir un colapso inminente de la estructura bancaria del país. La sorpresiva medida en efecto convierte la deuda externa de los bancos en obligación del gobierno”. Sin embargo, continuaba diciendo la misma revista, la nacionalización “es vista como una medida política para apaciguar la inquietud creciente de los sindicatos y los opositores del FMI. . . En términos financieros, la deuda externa de los bancos pudo haber sido resuelta mediante la liquidación en dólares a sus acreedores por el Banco Central y no por la nacionalización. Esta no era necesaria, los bancos no la pidieron y complicará las negociaciones.”¹⁵

También el embajador John Gavin criticó las medidas, sobre todo el control de cambios, se-

gún un artículo publicado por el *Wall Street Journal* el 9 de septiembre. El funcionario estadounidense dijo que su gobierno “podía ser objeto de severas críticas si presta ayuda al gobierno mexicano y a los bancos estadounidenses sin ayudar a los ciudadanos estadounidenses que han invertido dinero en México”. Estas inversiones —se refería a los mexdólares, depositados en bancos nacionales— serían de unos 2 mil millones de dólares. El día 14, Gavin declaraba que, a pesar de todo, Estados Unidos “debe hacer cuanto esté a su alcance para ayudar a México a resolver su crisis económica”.

Al mismo tiempo que en el “frente externo” las negociaciones sobre la deuda estaban detenidas —si bien no había presiones políticas y económicas evidentes en contra de la nacionalización y el control de cambios, a pesar de algunas críticas—, en el “frente interno” los empresarios mexicanos se replegaban cada vez más. Esto, a pesar de su franca oposición y a las intenciones de algunos de desatar una “ofensiva general” para echar atrás las medidas.

El 9 de septiembre los empresarios de Jalisco manifestaron su descontento con los decretos y lo mismo hizo el día 10 la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) exigiendo, además, la venta de las empresas nacionalizadas con la banca. Sin embargo, más allá de esto no hubo una respuesta unificada. El presidente del Centro Patronal del Norte tuvo que aclarar que por esos días los “organismos cúpula del sector empresarial no han cruzado los brazos y se encuentran en una etapa de análisis y consenso”. El 15 de septiembre, la Concanaco anunció, sin hacer mayores comentarios, que la Primera Asamblea Nacional de Empresarios, prevista originalmente para el 24 de ese mes, se posponía hasta noviembre. Un editorial publicado por *El Herald de México* explicaba que la reunión había sido suspendida, entre otros, por Clouthier, Goicochea, Basagoiti, Pandal Graff e Ignacio Barragán. “Las razones que se aducen son varias”, decía el mismo editorial. “Algunos dicen que no había razón para continuar los preparativos en virtud de que ya se había logrado un entendimiento con el gobierno respecto a los bienes materiales que estaban de por medio. Otros, que la razón

fundamental (sic) fueron las presiones del gobierno contra ellos para que se realizara la reunión. Y otros, porque no había consenso para que se realizara en tal fecha.”¹⁶

La Canacindra, por su parte, aprobó la reglamentación del control de cambios anunciada el día 16 y opinó, sorprendentemente, que la banca nacionalizada “estaba funcionando bien”. Inmediatamente, algunos empresarios de Sonora replicaron que discrepaban de los pronunciamientos de la Canacindra, y que apoyaban a sus “auténticos líderes”: Clouthier, Basagoiti y Goicochea.

El ambiente político interno se cargaba decididamente del lado del presidente y en apoyo a los decretos del día primero. Sin embargo, Miguel de la Madrid hasta ese momento no había apoyado explícitamente las medidas, limitándose a decir que demandaba “conjurar la violencia y el encono social”. También se comprometió a seguir desarrollando “las metas de la Revolución Mexicana”. El futuro presidente no se ataba las manos por las decisiones de quien en poco tiempo sería su antecesor y se reservaba un tiempo de espera—cuando asumiera formalmente el mando— para hacer explícito su plan de gobierno y sus intenciones respecto a la banca nacionalizada y el control integral de cambios. Desde luego, sus declaraciones mostraban una reserva implícita frente a los decretos del primero de septiembre y un deseo de reconciliarse lo más pronto posible con los empresarios.

A partir de la segunda quincena de septiembre, las declaraciones de todos los organismos empresariales adquirieron un tono mucho más conciliatorio. El día 22, Pandal aseguró que el “diálogo entre el sector empresarial y el estado nunca se ha roto”, después de entrevistarse con López Portillo. Rechazó también que los empresarios se hubieran reunido para conjurar. Dos días después, Clouthier señaló que el amparo interpuesto por 21 instituciones bancarias debería juzgarse con criterios propios del derecho y no de la política. Con esto, los empresarios se contentaban con dirimir la cuestión por la vía legal y renunciaban a ejercer mayores presiones políticas; aparentemente, ya no esperaban negociar mucho con el presidente en funciones y se dedicaron a negociar con el sucesor. En este aspecto, los empresarios enfo-

caron su atención hacia la intervención del estado. Goicochea, por ejemplo, señaló en una conferencia dictada en Estados Unidos que el “Estado mexicano controla (ahora) más del 80% de la economía del país. . . La estatización de la banca es una forma de centralizar la planificación ya que con ello se controlan los canales de crecimiento y desarrollo de las empresas privadas. . . Con estas medidas se cambian las estructuras socioeconómicas fundamentales del país y se entró al sistema del capitalismo de estado. . . Se trata de un audaz paso a la socialización de la economía pues de golpe el gobierno se convirtió en el administrador de los ahorros particulares, apoderándose de la facultad de decidir a dónde y cuándo se destinarán esos recursos determinados por la vía del financiamiento, el futuro de la economía nacional”.

Este punto de vista lo compartían otros dirigentes empresariales, como Ignacio Barragán, quienes por esos días hicieron declaraciones similares.¹⁷ Socialismo o capitalismo de estado fueron conceptos similares para los empresarios, quienes entendían que la nacionalización de la banca los ponía en desventaja frente al estado, afectando la autonomía de la empresa privada. También insistían en que se habían roto las reglas del juego que imperaron durante los últimos 45 años. Por eso ahora era tan importante frenar esa expansión, revertirla tanto como fuera posible y asegurarse que en el futuro, durante la próxima administración, el gobierno no realizara nuevas estatizaciones ni ejerciera el control de la banca en contra de los empresarios o sin su participación. La unidad del bloque en el poder había sido rota. Los empresarios querían una negociación que culminara en un nuevo pacto en el que la empresa privada mantuviera un papel central en la acumulación de capital.

Eran momentos de euforia política en que la dirección del Banco de México estaba en manos de Carlos Tello, identificado con una concepción que pregonaba abiertamente que la nacionalización era un paso hacia un sistema económico en el cual el estado tendría el papel central y la empresa privada un papel subordinado. En estas condiciones, los reclamos empresariales no parecían descabellados. Probablemente por eso opta-

ron por evitar en esos momentos un enfrentamiento mayor con el régimen y empezar a fijar los puntos de acuerdo con el próximo régimen. El costo de esta negociación radicó en que difícilmente la nacionalización sería revertida al punto de dejar las cosas como estaban antes del último informe de gobierno. Por otro lado, sin embargo, lo que les interesaba ganar era que la ruptura del bloque en el poder no fuera más allá, excluyendo a los grandes empresarios y, junto con ellos, a los ahora exbanqueros. La negociación del futuro tendría que incluir una nueva ley bancaria, la indemnización de los exbanqueros, la definición y reglamentación del área estatal y evitar más nacionalizaciones.

Estas fueron cuestiones que durante los últimos dos meses de López Portillo no avanzaron, algunas de ellas ni siquiera se tocaron en público. En cambio, fueron las medidas más importantes y las primeras del sexenio siguiente. Así, por ejemplo, cuando un sector de la burocracia política propuso definir una nueva ley bancaria (en octubre) el proceso fue detenido y el mismo López Portillo reconoció que esta tarea le tocaba a su sucesor. Por otra parte, se reformó el Artículo 28 constitucional, mismo que señalaba que "el servicio público de la banca y el crédito no será objeto de concesiones a particulares". De este modo, a partir de la segunda quincena de septiembre, la debilidad política, la división interna, las presiones del gobierno y la conveniencia de ver más hacia el futuro que al pasado, hicieron a los empresarios pasar de una actitud de confrontación a otra de negociación, especialmente con el presidente entrante.¹⁸

Pero, aun cuando los empresarios evitaron discutir en público los problemas centrales del "nuevo pacto" que pensaban fijar con De la Madrid, siguieron criticando y refiriéndose a otros problemas de política económica relacionados con la crisis. Cuestiones como la deuda privada, las divisas asignadas a los empresarios, las tasas de interés, la política del gasto público, etc., acapararon la atención. Sobre todo porque las medidas del nuevo director del Banco de México apuntaban en un sentido distinto al de sus propuestas, particularmente en lo que se refiere a la instrumentación del control de cambios, la fijación de las

tasas de interés y la paridad cambiaria. En este caso, también se llegó a acuerdos sustanciales con De la Madrid como se vería después. Inmediatamente que asumió el poder, se apresuró a tomar medidas radicalmente opuestas a las de Tello, e incluso restituyó en su cargo a Miguel Mancera.

En efecto, los empresarios realizaron una crítica constante a las medidas del Banco de México mientras Tello estuvo en su dirección. El 24 de septiembre, el CEESP señalaba que las nuevas tasas de interés no lograrían bajar la inflación y que, por el contrario, una política crediticia expansionista podría "echarle más leña a la hoguera de la inflación". Poco después y por razones similares, las cámaras de comercio criticaron lo que llamaron el "populismo financiero", término que iba a ser retomado por De la Madrid para condenar la política seguida por Tello. La Canaintra de Nuevo León también rechazó la política del Banco de México, lo mismo que Clouthier, quien dijo que la banca "se está descapitalizando porque opera en forma ineficiente". La única excepción fue la Canaco, que consideró que la disminución de las tasas alentaría la construcción de viviendas de interés social lo que a su vez detendría las tendencias recesivas de la economía.¹⁹

Por otro lado, durante septiembre, los sindicatos de la CTM plantearon la exigencia de un nuevo aumento de salarios que recibió el rechazo de los empresarios por considerarlo "inoportuno". Sin embargo, a fines de septiembre, éstos anunciaron que se había llegado a un acuerdo "sin enfrentamientos" según el cual los aumentos se determinarían empresa por empresa sin que —como en abril— la Secretaría del Trabajo dictara un aumento general. La CTM dijo haber emplazado a huelga en 11 mil sindicatos a principios de octubre por aumento del 50% mientras otras centrales del Congreso del Trabajo se negaron a secundar los emplazamientos. Los empresarios llamaron al sector obrero a no ejercer presiones y admitieron que en las negociaciones previas entre las representaciones sindicales y las patronales "no se había llegado a ningún acuerdo".

Durante octubre, a pesar de la oposición empresarial a las medidas del Banco de México y a las amenazas de huelga de la CTM, las declaracio-

nes patronales fueron más moderadas. Incluso la cuestión de la nacionalización de la banca fue omitida. Los comentarios se enfocaban más bien en el sentido de “llegar a un diálogo con el estado” y de “reprobar los antagonismos” y los “enfrentamientos estériles”, recalcando que “tenían fe en el próximo régimen”.²⁰

El 28 de octubre, uno de los más importantes banqueros expropiados, al salir de una entrevista con De la Madrid señaló que “. . .no se había hablado con nadie sobre la negociación de una indemnización” pero que tenían confianza en que el gobierno actuaría “justa y equilibradamente”. De esta manera, se evidenciaba que los empresarios difícilmente esperaban el regreso de la banca pero al mismo tiempo cocinaban ya un acuerdo con el nuevo régimen.

Si bien las declaraciones oficiales de los líderes empresariales bajaron de tono, un sector de ellos se dedicó a organizar una serie de reuniones llamadas “México en la Libertad”. El viernes 8 de octubre se inició la primera, a la que asistieron no sólo organizaciones empresariales sino también “grupos cívicos, asociaciones profesionales, clubes de servicios, agrupaciones estudiantiles, agrupaciones femeniles, etc.” A esta primera reunión siguieron otras, organizadas regionalmente, que supuestamente culminarían con una magna Asamblea en la Ciudad de México. En estos foros, dirigentes, ex-dirigentes y voceros empresariales de distinto tipo se abocaron a exponer una visión del país no sólo a partir del primero de septiembre sino de los últimos 10 años. De esta manera, los empresarios realizaban una actividad que más que pretender presionar directamente al estado, buscaba propagandizar su doctrina, sus planteamientos políticos e ideológicos y cohesionarse con distintas organizaciones sociales. No se intentaban, aparentemente, resultados inmediatos sino iniciar, o si se quiere continuar de manera más amplia, una actividad política directa en franjas de la sociedad civil. Aprovechando la crisis y la nacionalización, se trataba de proyectar en amplios sectores sociales una imagen del gobierno, la sociedad, la crisis y el futuro del país.

No es casual que los principales dirigentes de las organizaciones empresariales que participaron y los aspectos más destacados que fueron toca-

dos en estas reuniones hayan reaparecido en 1983 durante las campañas electorales en varios estados del norte del país bajo la bandera del Partido Acción Nacional (PAN).

Por su parte, López Portillo entregaba, el 21 de octubre, al Congreso de la Unión, copias de los registros públicos de la propiedad de casi todos los condados de las zonas fronterizas del sur de Estados Unidos y parte de Manhattan, Nueva York, con los nombres de miles de mexicanos que habían adquirido bienes inmuebles en esas localidades. El presidente quería así legitimar las medidas tomadas el primero de septiembre y, mediante disposiciones legales, estimular el retorno de los capitales. Todas estas medidas no surtieron ningún efecto práctico y muy pronto fueron olvidadas. Los archivos, pocas semanas más tarde, fueron “oficialmente” embodegados.

También a fines de octubre, el presidente López Portillo viajó a Monterrey como parte de las giras que realizó nacionalmente para “despedirse”. En aquella ciudad, el presidente esperaba tener una reunión con representantes del gobierno estatal y los empresarios. Estos no asistieron y López Portillo públicamente lamentó el hecho. Este fue uno de los últimos incidentes entre los empresarios y el régimen saliente. Para entonces, a los primeros poco les importaba ya lo que López Portillo pudiera hacer o decir.

Igualmente, por esas fechas, la CTM anunciaba que de 38 mil emplazamientos a huelga en demanda de ajuste salarial, se habían resuelto más de 5 mil en los que los trabajadores habían obtenido aumentos de 1,500 pesos mensuales. Sin embargo, anunciaron también que en muchas otras empresas se habían prorrogado los emplazamientos.²¹ Lo cierto es que la CTM había obtenido magros resultados. El gobierno no había concedido ningún aumento de emergencia en las empresas paraestatales ni en la burocracia. En este caso también, el gobierno saliente ya no deseaba ni podía intervenir.

Había, sin embargo, otros problemas que a pesar del desgaste del gobierno y de su pronto relevo no podían esperar hasta el primero de diciembre. A principios de octubre el gobierno tuvo que abrir, mediante el Banco de México, casas de bolsa en la frontera norte para comprar y vender

divisas a un precio distinto y desde luego superior al del mercado controlado. Inmediatamente, la cotización alcanzó 150 pesos por dólar, más del doble del "ordinario" que se cotizaba a 70 pesos, y lo triple del "preferencial".

La Canacindra, las cámaras patronales y de comercio, consideraron positiva la medida pero insistieron en la desaparición del control de cambios. El CEESP señaló que "los decretos de nacionalización de la banca y control generalizado de cambios fracasaron como estrategia financiera y han debilitado el aparato productivo y acelerado el proceso inflacionario". Sugerían también que las tasas de interés fueran incrementadas. Planteamientos similares fueron hechos por otras organizaciones empresariales.²²

Poco después de la apertura de las casas de bolsa en la frontera, se hizo público el acuerdo entre el FMI y el gobierno mexicano con lo cual el país recibía un préstamo por 6,500 millones de dólares y el aval del Fondo para renegociar su deuda. El acuerdo estaba, en lo fundamental, dentro de los lineamientos tradicionales del FMI sobre todo en lo que se refiere a la disminución del gasto público, pero contenía una serie de aspectos relacionados con el control de cambios, la política salarial y el control de las importaciones deliberadamente ambiguos. Con esto, el gobierno saliente dejaba a su sucesor resuelta la negociación con el FMI, y pretendía haber salvado sus principios, al mismo tiempo que permitía que el próximo gobierno impusiera con relativa libertad su propio programa.

Quedaba todavía un problema sin resolver: el de la deuda externa privada. Según afirmaciones periodísticas, los banqueros internacionales habían propuesto un mecanismo mediante el cual las empresas pagarían al Banco de México con pesos y a una tasa especial para que esta institución otorgara los dólares necesarios a las empresas para saldar sus deudas. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda señalaron que para eso se estaba pensando en la creación de un fideicomiso, e incluso plantearon la posibilidad de que este mecanismo fuera aprobado antes del 24 de noviembre. Sin embargo, también en esta cuestión el régimen de López Portillo se abstuvo de tomar una decisión y tocó a la siguiente adminis-

tración la creación de lo que se llamó después Ficorca.

Así, a mediados de noviembre, el gobierno de López Portillo, en un lapso de dos meses y medio había mantenido formalmente el control integral de cambios pero en los hechos éste había sufrido una modificación importante con la apertura de las casas de bolsa en la frontera. No había dado marcha atrás en la nacionalización de la banca privada pero no la había reglamentado. Había ejecutado una política financiera y monetaria completamente distinta a la que había prevalecido durante casi todo el sexenio, pero éstas fueron criticadas y rechazadas por los organismos empresariales.

De otro lado, no había avalado la última negociación salarial y había firmado una Carta de Intención con el FMI. Quedaban pendientes todo lo relacionado con la indemnización a los exbanqueros y la devolución de las empresas no bancarias. Todas estas cuestiones fueron objeto de negociación entre el presidente entrante y los empresarios.

En los últimos días de noviembre, sin embargo, el presidente López Portillo protagonizó lo que sería el último enfrentamiento verbal con el sector privado. El presidente acusó de "rapaces y aprovechados" a los "sacadólares" e hizo alusión a los exbanqueros y a los empresarios. Clouthier contestó que "el sector privado respondía con hechos a estas acusaciones" y agregaba que "las relaciones entre el Estado y el sector privado no se han deteriorado por las declaraciones del presidente López Portillo debido a que el gobierno es una institución y no una persona". Agregó también que "los empresarios están optimistas de que México salga adelante a base de una crítica constructiva que conduzca al balanceo (sic) de poderes". Poco después, el 15 de noviembre, López Portillo, haciendo referencia a las reuniones *México en la Libertad*, señaló: "A quienes no quieren pasar por las obligaciones del proceso político y se arrogan la representación popular para participar gremialmente en las decisiones nacionales. . ." les advirtió que ". . . México está resuelto a vivir en la democracia y a no confundir el poder económico con el poder político. . . Se quieren saltar a la torera el juego electoral y

las obligaciones de los partidos políticos y tomar decisiones nacionales en apoyo de sus intereses. . . Y este paso contrainstitucional del interés del gremio a la política, este gremialismo es la sala del corporativismo, que es el supuesto del fascismo”.

El comentario de Clouthier fue otra vez evasivo: “No me aturden las palabras” expresó. Al otro día, la Concanaco señaló simplemente que “difería del criterio gubernamental”. Sin embargo, la CTM terció en la discusión de manera sumamente agresiva. Fidel Velázquez, en un discurso, señaló: “No olviden, señores empresarios, que los obreros elaboran los alimentos que comen; que son los que hacen la ropa para que se vistan y calcen; que son los que construyen los automóviles que usan y que son los que levantan los palacios que habitan; y que no se olviden que serán los obreros también los que pueden construir sus ataúdes y cavar las tumbas para enterrarlos para siempre”.²³

La violencia de este discurso tampoco conmovió a los empresarios que, una vez más, no respondieron. Tenían sus ojos puestos en la etapa que se iniciaría 15 días después. Eran —pensaban— los últimos fulgores de una batalla que ya no herían a nadie, ni amenazaban nada. Lo peor había pasado. . .

Dos días antes de las declaraciones de López Portillo y Fidel Velázquez, el mismo Clouthier había llamado a posponer las reuniones de *México en la Libertad* para después del cambio de gobierno. “No se quería —dijo— que grupos ajenos

polaricen y radicalicen las reuniones y se apoderen del despertar cívico creado en esos foros”. Un editorialista del *Excelsior*, vinculado a los medios empresariales explicaba, una semana después, que el sistema político mexicano tenía tres mecanismos para tratar con la oposición: “la cooptación, la defensa abierta (o represión), y la negociación”. Agregaba que esta tercera vía era la más adecuada en esos momentos para los empresarios y que las reuniones de *México en la Libertad* no habían sido suspendidas por la presión oficial sino por decisión propia del CCE.²⁴

El mismo día en que se realizaron las declaraciones de Fidel Velázquez, Clouthier, presidente del CCE se reunía con De la Madrid. Al final de la entrevista declaró a la prensa que el sector privado “reiteró al presidente electo su decisión de colaborar en todo lo posible para superar la crisis”, también dijo que mantendrían “una actitud de colaboración y respeto hacia el próximo régimen” y negó que hubiera enfrentamientos: “el diálogo entre los sectores público y privado jamás se ha interrumpido”. Poco después, en el mismo tono se pronunciaron la Concamín y la Coparmex. Un día antes del cambio de poderes, los empresarios declaraban que “el camino de México es la unidad en torno a Miguel de la Madrid para sacar al país de la crisis” y demandaron “la erradicación del nepotismo, de la corrupción y del intervencionismo estatal en la economía y el respeto a las libertades”. Al final de su declaración aseguraron: “Hay tranquilidad. . .”²⁵

Notas

1 *El Financiero*, 6 de agosto de 1982.

2 *El Herald de México*, 7 de agosto de 1982.

3 El texto íntegro de las declaraciones del presidente López Portillo puede consultarse en *unomásuno*, 8 de agosto de 1982.

4 Esta omisión pudo deberse a la falta de estudios previos, o a discrepancias entre el equipo gobernante. Manuel Buénda lo achacó a un deliberado boicot del director del Banco de México, recordando que este funcionario se había opuesto decididamente a cualquier tipo de control de cambios apenas unos meses antes. Ver su artículo en *Excelsior*, 12 de agosto de 1982.

5 *El Sol de México*, 13 de agosto de 1982.

6 *unomásuno*, 14 de agosto de 1982.

7 Un reportaje periodístico aparecido por esos días señalaba que en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se integraban poderosas corrientes económicas e ideológicas en donde predominaban los intereses del gran capital, pero que su autoridad moral era rechazada por otras organizaciones empresariales porque “no las incluye a la hora de tomar decisiones”. Su presidente, agregaba el reportaje, “no ha sido capaz de armonizar los intereses de los grandes capitalistas que le darían representatividad real del conjunto de la comunidad empresarial”.

“Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) se ha erosionado al dejar ‘morir solos’ a algunos de sus asociados. . . Su presidente se ha desgastado por los enfrentamientos internos. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) a su vez, se ha minado en sus bases por grupos que buscan el poder institucional. Miembros del gabinete, como Oteyza, han manipulado a sus dirigentes hasta casi imponerles un presidente: Barragán”.

El reportaje explicaba también que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), en cambio, había “mantenido unidos a sus agremiados”. “La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEEX), centrada más hacia la parte ideológica, se ha ganado una representación que han perdido las demás. Pero se ha manejado y ése es su error como ‘llaneros solitarios sin el apoyo de ningún indio’”. En síntesis —finalizaba el periodista— “cada uno de los actuales dirigentes empresariales camina por el sendero que dicta su conciencia o interés, desgastando su representatividad. Carecen de bases políticas, programáticas y económicas que les impiden proyectarse hacia la sociedad como órganos de consulta intermedios que hagan contrapeso al poder público”. Ver, en *El Sol de México*, 13 de agosto de 1982, la columna “Agenda Privada”.

⁸ *unomásuno*, 18 de agosto de 1982.

⁹ *El Heraldo de México*, 19 de agosto de 1982.

¹⁰ José María Basagoiti, en *unomásuno*, 25 de agosto de 1982.

¹¹ Estos reportajes fueron reproducidos en *unomásuno*, 25 y 30 de agosto de 1982, y *Proceso*, núm. 304.

¹² *unomásuno*, 30 de agosto de 1982.

¹³ Revista *Expansión*, núm. 349, 15 de septiembre de 1982.

¹⁴ Las declaraciones y hechos más importantes que se dieron durante la primera quincena de septiembre fueron recogidos y publicados en una cronología que apareció

en “La Cultura en México” suplemento de *Siempre*, núms. 1061 y 1062, 13 y 20 de octubre de 1982.

¹⁵ *International Business Week*, septiembre 13, 1982, pp. 18 y 80.

¹⁶ “Entre empresarios”, en *El Heraldo de México*, 17 de septiembre de 1982.

¹⁷ *El Heraldo de México*, 18 de septiembre de 1982.

¹⁸ Ver sobre este aspecto, *Análisis Político*, núm. 9, vol. 11, 15 de octubre de 1982.

¹⁹ CEESP, en *El Heraldo de México*, 27 de septiembre; CCE, en el mismo diario, el 4 de octubre; CAINTRA de Nuevo León, en *El Sol de México*, 1 de octubre, y CANACO de la Cd. de México, en *unomásuno*, 23 de octubre de 1982.

²⁰ Declaraciones de CANACINTRA en *El Heraldo*. . . , 21 de septiembre; del CCE, en *Excelsior*, el 26 de septiembre; de la CONCAMIN, en *unomásuno*, el 7 y 11 de octubre de 1982.

²¹ *El Heraldo de México*, 29 de octubre de 1982, y *unomásuno*, 31 de octubre de 1982.

²² El anuncio de la Secretaría de Hacienda fue publicado el 3 de noviembre. Los comentarios de las organizaciones empresariales aparecieron en la prensa nacional al día siguiente, y el 7 y 8 de noviembre. Ver *El Heraldo de México* y *Excelsior*.

²³ Las declaraciones de Manuel Clouthier aparecieron en *unomásuno* y en *El Heraldo*, el 16 de noviembre de 1982. Las de López Portillo aparecieron en la prensa nacional el mismo día. Fernando Marina Janet declaró a *El Heraldo*. . . el 17 de noviembre y el discurso de Fidel Velázquez apareció en la prensa nacional el mismo día.

²⁴ Las declaraciones de Clouthier aparecieron en *El Heraldo*. . . el 12 de noviembre de 1982. El comentario periodístico apareció en *Excelsior* el día 18.

²⁵ Ver *unomásuno* del 17 de noviembre y *El Heraldo* del 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 1982.

